

RELATORÍA JURÍDICA
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

Miércoles 04 de Febrero de 2015

Municipio de Cali es responsable por mal estado de malla vial que provocó accidente a motociclistas

Para la Sala “no existe duda de que el accidente de tránsito que sufrieron María Victoria y Julián Andrés acaeció en uno de los corredores viales del municipio de Cali, el cual se encontraba en mal estado, presentaba dos huecos de grandes dimensiones (esto según los testigos), no contaba con demarcación ni señalización y ofrecía poca visibilidad.

De esta forma y atendiendo a las versiones testimoniales recién transcritas, se tiene probado que el mal estado de la vía representaba un riesgo inminente para quienes transitaran por allí, riesgo que, de hecho, se concretó con la caída de los mencionados motociclistas”.

Ahora bien, “le asiste razón a la parte demandada en lo que atañe a que los testigos no observaron el preciso momento del accidente; sin embargo, ello no es razón suficiente para que la Sala desestime su dicho, pues lo cierto es que ellos sí conocieron directamente de las condiciones en que se encontraba el corredor vial el día del suceso y, además, al acercarse al sitio del accidente, constataron que la moto había caído en uno de los huecos de los que dan cuenta ellos mismos (los testigos) y el informe de accidente atrás mencionado”.

En otras palabras, “el municipio no desvirtuó la falla en el servicio, ni demostró haber cumplido con sus deberes de vigilancia, mantenimiento, rehabilitación, conservación y señalización del espacio público, escenario del accidente.

Por su parte, los demandantes demostraron que el hecho dañoso ocurrió por la conducta omisiva de la administración municipal, toda vez que, pese a tener a su cargo el deber de tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de esta clase de accidentes a través de la reparación de los daños que se presentan en la malla vial, la remoción de los obstáculos o, por lo menos, la instalación de avisos preventivos sobre la existencia de un factor riesgo sobre la vía, nada hizo al respecto”. Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N31527 (02411-01) ARD-2014/06/11

Víctima debe probar que perjuicio obedeció a acción u omisión de la administración

Así lo recordó el Consejo de Estado, al indicar que si el incumplimiento de los deberes no es el nexo causal de la producción del daño no hay lugar a que este sea imputado a la Nación. Recordó, así mismo, que el artículo 90 de la Constitución le impone al Estado el deber de reparar el perjuicio que le sea imputable.

En este caso, si bien la muerte de las víctimas de un accidente de tránsito coincidió con algunas omisiones en torno a la iluminación y mantenimiento de la vía donde se produjo la colisión, las pruebas demuestran que la verdadera causa fue la imprudencia de quienes padecieron el daño (C. P. Stella Conto). (Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 20001233100020000116001 (31368), 11/13/2014) Noticia generada en Feb. 3/15 (10:13 a.m.)

Por posible promoción de urbanizaciones ilegales en la ciudad de Medellín, Corte compulsa copias a la Fiscalía General

Dirigida contra autoridades de Medellín. Destruyeron una casa de propiedad del accionante, la cual era utilizada por una comunidad indígena y de artesanos, en donde además vivían la hija menor del peticionario y la madre de ésta. Para resolver, la Sala analizó temática relacionada con el derecho a la vivienda digna, las facultades de ordenamiento territorial de las autoridades administrativas, el reconocimiento constitucional a las comunidades indígenas y su relación con la tierra.

Consideró que las actuaciones administrativas y policivas que se demandan fueron razonables y que por el contrario, las realizadas por el actor constituyeron un abuso del derecho, específicamente del principio de vivienda digna y del reconocimiento constitucional de propiedad de las comunidades indígenas, para pretender un beneficio económico. Niega el amparo.

Ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones correspondientes frente a los hechos y determine si el accionante es responsable penalmente de, entre otras conductas, participar en esquemas de promoción de urbanizaciones ilegales en la ciudad de Medellín. CorteConstitucional-T-2014-N0825 (T-4424461) Sentencia 2014/11/05

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Acción procedente para el reconocimiento de un contrato realidad.

Cuando se celebra un contrato de prestación de servicios con la finalidad de disimular una verdadera relación laboral, o cuando el acuerdo en principio tuvo las notas características de un contrato de la referida naturaleza y se convierte con el tiempo, en razón de las obligaciones impuestas al contratista, en una relación de dependencia y subordinación, quien se ve sometido a tal circunstancia tiene derecho a reclamar el reconocimiento de la condición real de trabajador y por ende, el pago de las prestaciones que de tal relación se derivan.

En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado analizando, en el caso a considerar, si la acción procedente frente a un Contrato Estatal es la de nulidad y restablecimiento del derecho o la acción contractual.

En efecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo advirtió en el caso que hubo una indebida escogencia de la acción, ya que la relativa a controversias contractuales no era la llamada a ser ejercida, por cuanto si bien el artículo 87 del C.C.A, establecía que la misma resulta procedente, entre otras cosas, cuando se aduce la pretensión de que se declare la nulidad de uno o varios contratos, considerando que en realidad el origen del daño por el cual se está reclamando reparación, no fue propiamente un contrato, sino el acto administrativo que negó la solicitud del pago de las acreencias de orden laboral.

La reviviscencia de las normas derogadas del código contencioso administrativo en lo que respecta al derecho de petición

Desde hace varias décadas, la jurisprudencia y la doctrina en Colombia se han planteado el problema de establecer si la declaratoria de inexecuibilidad de una norma con fuerza de ley que, a su vez, ha derogado expresa o tácitamente otras disposiciones, "revive" los preceptos derogados, es decir, si produce el efecto de reincorporar tales normas al ordenamiento jurídico, dejando sin efectos su derogatoria.

Esto es lo que se ha llamado "reviviscencia". La reviviscencia de las normas derogadas sería procedente siempre que: (a) Las disposiciones derogadas que se restablecen no sean, a primera vista y en forma ostensible, contrarias a la Constitución; (b) la reincorporación de tales preceptos al ordenamiento jurídico se requiera para mantener la

integridad y la armonía del sistema jurídico, especialmente en cuanto al efectivo desarrollo y aplicación de los principios y las normas constitucionales, y (e) !! a reviviscencia de esas normas no genere mayor inseguridad jurídica, sino que, por el contrario, permita suplir el vacío y, por lo tanto, la incertidumbre generada por la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones derogatorias.

En conclusión, desde el 1 de enero de 2015 y hasta fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, se presenta la reviviscencia de las mencionadas disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984). SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas- Bogotá. D.C.. veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015) Radicación interna: 2243

No hay vacío legal en cuanto a la utilización del derecho de petición: Minjusticia

El Ministerio de Justicia consultó sobre la normativa aplicable al derecho de petición luego de la Sentencia C-818 del 2011, que declaró inexequibles los artículos 13 a 32 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011), la cual produce efectos desde este año, debido a que está pendiente de sanción presidencial el proyecto de ley estatutaria 065/12S-227/12C, que regula este derecho fundamental y sustituye el título II del CPACA.

Esta reviviscencia normativa constituye un mecanismo transitorio para mantener en funcionamiento este recurso ciudadano mientras entra en vigencia la ley estatutaria que lo regulará, la cual ya fue aprobada por el Congreso, explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

“Conforme a lo explicado en este concepto (publicado por LEGISmóvil el pasado 30 de enero), desde el 1º de enero del 2015 y hasta fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición se presenta la reviviscencia de las mencionadas disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984)”, agregó el ministro.

No puede entonces haber ninguna duda en cuanto a que la figura está vigente actualmente y en cuanto a que ella se regirá por las disposiciones del Código Contencioso Administrativo hasta cuando entre

en vigencia la ley que lo regulará de manera integral. (Minjusticia, Comunicado, 02/03/2015) Noticia generada en Feb. 3/15 (4:42 p.m.)

Diferencia entre las funciones de las autoridades de tránsito frente a la actividad de tránsito de la Policía

Demanda de nulidad simple contra apartes del Decreto 4222 de 2006 mediante el cual se modificó parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa.

El artículo 1 acusado, modificó la estructura de la Policía Nacional creando en ella una dependencia denominada "Dirección de tránsito y Transporte" y el artículo 11 también acusado le asignó funciones a la señalada dependencia de la Policía Nacional, la Corporación no accedió a las pretensiones de la demanda.

Advirtió la Sala "que las funciones de las autoridades de tránsito están enmarcadas por la necesidad de la administración de garantizar la seguridad, la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos, frente a la actividad del tránsito, por ello la misma Constitución (artículo 209) requiere, también para esta actividad, que las autoridades administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, que es lo que en últimas se pretendió con la creación y asignación de funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional".

Consejo de Estado CE-SEC1-EXP2014-N00229-00 Nulidad-Simple 2014/10/16

Importancia del recurso de apelación en los procesos de tutela y la consecuencia de su pretermisión

La Corte ha considerado que se afecta la validez del proceso de tutela cuando los jueces realizan un conteo erróneo del plazo que tiene el actor para presentar el recurso, de modo que declaran extemporáneos la apelación. Esa decisión de nulidad se sustenta en que el ciudadano no puede soportar la carga de un yerro de la administración judicial, pues ello desconocería principios constitucionales, máxime si la irregularidad no le es imputable.

En conclusión, los jueces y tribunales en los procesos de tutela tienen vedado rechazar o negar el recurso de amparo promovido por las partes

o los terceros con interés por motivos diferentes a la extemporaneidad de la petición o la falta de legitimidad para promover la apelación.

En caso de que los jueces trasgredan esa restricción, el trámite adolecerá de nulidad insaneable, porque pretermittirán una instancia y vulnerarán los derechos al debido proceso y a la doble instancia de los sujetos procesales. Magistrada (e) Ponente: MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ- Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2014).- Sentencia T-661

Circulares que no generan efectos jurídicos también serán demandables

La Sección Primera del Consejo de Estado cambió su jurisprudencia según la cual este tipo de actuaciones no podían ser objeto de pronunciamiento en sede judicial. Para la corporación, esta limitación al juez para inspeccionar ciertas circulares de la administración generaba un tipo de “inmunidad” de las actuaciones de las entidades que no se adecuaba con las obligaciones de la jurisdicción para ejercer control, como se lo impone el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 del 2011).

A su juicio, esta nueva posición jurisprudencial es la mejor manera de comprender la acción de nulidad cuando se evidencien efectos nocivos en los actos administrativos, en la forma en que lo plantea el artículo 137 del CPACA (numeral 3º). En consecuencia, cualquier circular, independientemente de que genere efectos jurídicos o no, será susceptible de control jurisdiccional (C. P. Guillermo Vargas Ayala).

(Consejo de Estado Sección Primera, Sentencia 05001233300020120053301, 11/27/2014) Noticia generada en Ene. 30/15 (12:42 p.m.)

Demanda de casación debe contener un planteamiento y desarrollo lógico que sustente su admisión

Esta de Sala de la Corte ha adoctrinado que la demanda de casación debe reunir no sólo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también debe contener un planteamiento y desarrollo lógicos.

Por tal razón, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos pertinentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno y otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo, tal como lo ha dicho la Sala.

Los mencionados requerimientos, como también lo ha dicho esta Corporación, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley.

Corte Suprema de Justicia- SALA DE CASACIÓN LABORAL- Magistrado Ponente: RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO- Bogotá D. C., nueve (09) de julio de dos mil catorce (2014)- Radicación No. 45705

Transferencia de propiedad genera traslado del impuesto de delineación urbana

La transferencia ilimitada del dominio del inmueble realizada a través del contrato de compraventa y la tradición acarrea la adquisición de las obligaciones inherentes al bien. Así lo afirmó la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al advertir que cuando se transfiere la propiedad también se trasladan las obligaciones y derechos que afectan el predio, como el de construir o edificar, junto con la obligación tributaria que se genera por su ejercicio, esto es, el impuesto de delineación urbana.

En ese sentido, la corporación explicó que si dicho tributo se declaró y pagó frente a un bien que fue enajenado posteriormente, pero el impuesto es modificado en un proceso de fiscalización adelantado por administración, el nuevo dueño es quien debe responder.

Así mismo, añadió que la licencia se adscribe al inmueble y no al licenciatario, de manera que mientras esté vigente y no varíen las especificaciones técnicas de la construcción ni las disposiciones a las que debe someterse, el cambio de propietario no modifica las condiciones de aquella ni sus consecuencias (C. P. Jorge Octavio Ramírez). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 25000232700020110018701 (19440), 12/16/2014)- Noticia generada en Feb. 3/15 (3:35 p.m.)

Conclusiones sobre necesidades del servicio no pueden ser suplidas por estudios financieros

Así lo determinó el Consejo de Estado al precisar que la modificación de planta de personal únicamente puede estar basada en las acepciones que surjan del estudio técnico, so pena de adolecer de falsa motivación.

Ello teniendo en cuenta que el artículo 148 del Decreto 1572 de 1978 sostiene que las modificaciones de planta de personal de entidades del nivel ejecutivo deben atender a las necesidades del servicio y que estas, a su vez, deben surgir de las conclusiones del citado estudio técnico (C. P. Gustavo Gómez). (Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 05001233100020020301201 (291913), 02/03/2015) Noticia generada en Feb. 3/15 (12:12 p.m.)

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Requisitos para su procedencia

El Consejo de Estado en reciente providencia reiteró que sólo es posible alegar el rompimiento del equilibrio económico del contrato, cuando se dan las siguientes circunstancias:

- 1) Que se presente un hecho con posterioridad a la celebración del contrato.
- 2) Que ese hecho sea imprevisto e imprevisible para las partes al momento de celebración del contrato.
- 3) Que el hecho sea ajeno a la parte afectada y,
- 4) Que el hecho produzca una alteración anormal y grave de la ecuación contractual que dificulte la ejecución del contrato más no la imposibilite.

De otra parte, se indicó que así hayan transcurrido los plazos para la liquidación bilateral y aún para la unilateral sin que el contrato haya sido liquidado, éste todavía puede serlo dentro del término de caducidad de la acción, de común acuerdo o unilateralmente por la administración, quien no pierde la competencia para ello, salvo en el caso de que se haya presentado demanda ante el juez del contrato y se haya notificado el auto admisorio de la misma, con la pretensión de que aquel sea liquidado.

Finalmente, el Alto Tribunal de lo Contencioso indicó que con anterioridad de la Ley 1150 de 2007 y bajo el amparo de la Ley 80 de

1993, las entidades del Estado no tenían competencia para imponer a su contratista sanciones derivadas de su incumplimiento parcial o total, de manera unilateral, a través de actos administrativos (multas o penal pecuniaria), a diferencia de lo que sucedía en el anterior estatuto de contratación.

Obligaciones contractuales solo son exigibles en tanto la contraparte también cumpla con lo pactado

Así lo explicó el Consejo de Estado, al determinar que no puede alegarse incumplimiento del contratista cuando este es atribuible a que el contratante no cumplió con lo pactado. En ese sentido, mencionó el artículo 1609 del Código Civil, que indica que ninguna de las dos partes está en mora cuando se trata de contratos bilaterales en los cuales la contraparte tampoco ha cumplido.

Añadió que de los artículos 1602 y 1603 se desprende el deber de resarcir el incumplimiento de las responsabilidades contractuales. En este caso, dijo, el Consejo Superior de la Judicatura (representado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial) produjo daño al contratista, al no permitirle ejecutar su obligación contractual de ejercer labores de mantenimiento de automotores al servicio de las altas cortes(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 25000232600019980123101 (27383), 10/15/2014) Noticia generada en Feb. 3/15 (3:17 p.m.)

ADICIONALES ESTÁN SUJETOS AL PRINCIPAL

No existe ninguna norma que autorice a la Administración Pública a realizar prórrogas automáticas en sus contratos

A pesar de que el contratista siga desarrollando actividades propias del contrato luego del vencimiento del mismo, no opera el fenómeno de la prórroga automática.

Sobre los contratos estatales, la Corporación precisó: "Toda vez que es la misma Ley la que marca el momento preciso a partir del cual tales contratos se perfeccionan, es decir empiezan a existir para el mundo jurídico, viene a ser claro que mientras dicho perfeccionamiento no se alcance, los proyectados contratos no podrán reputarse como existentes, en tanto que dicha formalidad especial a que está sujeta la formación de este tipo de contratos, constituye claramente una

solemnidad legal ad sub substantiam actus, cuya ausencia comportaría su inexistencia.

Lo mismo se predica respecto de los contratos adicionales, dado que en relación con su existencia están sujetos a las mismas normas que gobiernan el contrato principal”.

Así las cosas, La Sala consideró improcedente la impugnación realizada por el demandante, quien solicitaba que se declarara una supuesta prórroga de hecho de un contrato, pues a pesar de haberse vencido su término, éste continuó desarrollando obligaciones propias del mismo.

Por lo tanto, confirmó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que “ha de decirse que en tanto las partes sujetaron la terminación del contrato al vencimiento de su plazo de duración, los hechos que se desarrollaron con posterioridad a su culminación no pueden entenderse sujetos a él y, por tanto, las pretensiones que de tales eventos se desprenden no encuentran sustento en el contrato que la parte demandante supone como su fuente, así como tampoco pueden entenderse surgidas de una 'prórroga automática' de aquél, toda vez que en la normatividad especial que regula la contratación de la Administración Pública no existe norma alguna que así lo autorice”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N27143 (02774-01) Contractual 2014/06/25

Vulneración a las garantías del debido proceso y del derecho de defensa por parte del operador disciplinario

Las garantías del debido proceso y del derecho de defensa se vulneran si el operador disciplinario omite cumplir su deber de respetar las fases o etapas procesales fijadas por la ley, como cuando se omite alguna de las ritualidades dentro de una de ellas, en cuanto garantizan la celeridad, la eficacia, la eficiencia y transparencia de la administración de justicia, y hace operante y materializa el acceso a la misma, al hacer efectivo el derecho a la defensa y contradicción, los cuales integran el núcleo esencial del debido proceso.

Más allá de las consideraciones sobre el incumplimiento de los ciclos procesales, la jurisprudencia constitucional ha subrayado la importancia que tiene, para la conservación de las garantías superiores, el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales se desarrollen las investigaciones.

Este cometido, a los ojos de la doctrina constitucional, es requisito mínimo para una adecuada administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.) y elemento necesario para preservar la seguridad jurídica de los asociados.

Consejo Superior de la Judicatura- SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA- Magistrada Ponente Doctora JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ- Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014)- Radicado No. 050011102000201103324 01 (9323-19)

Excepción al principio general de inembargabilidad de los recursos del sistema general de participaciones

En primer término, es de precisa que la inembargabilidad de los recursos públicos, está establecida en el artículo 63 de la Constitución Política, el cual establece los bienes que son inembargables, imprescriptibles e inalienables.

Por su parte el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, determina que son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

Ha planteado la jurisprudencia las excepciones al principio general de la inembargabilidad de los recursos públicos, la primera se relaciona con los créditos laborales, la segunda, se relaciona con las sentencias judiciales para garantizar los derechos reconocidos en dichas providencias y la tercera se origina en los títulos emanados por el Estado, que contengan una obligación clara, expresa y exigible. Contraloría General - Diciembre 18 de 2014 - Concepto jurídico 84674

Wilson Ruiz es el nuevo presidente del Consejo Superior de la Judicatura

El abogado de la Universidad Libre de Cali (Valle) asumirá el cargo de manos de su compañero de la Sala Disciplinaria, Ovidio Claros, quien asumió la tarea de manera temporal, tras la anulación de la elección del presidente de la corporación, Francisco Ricaurte. Ruiz tiene doctorado en Derecho Administrativo, tras convenio institucional con las universidades de San Buenaventura y Pontificia Bolivariana; también tiene doctorado presencial en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España), entre otros títulos académicos.

El jurista, que presidió su sala en el 2013, ha publicado obras como "Pensamiento jurisprudencial en materia de responsabilidad fiscal en Colombia" (2003) y "Responsabilidad medica estatal" (2004 y 2006). Así mismo, fue elegido Édgar Carlos Sanabria como nuevo vicepresidente, abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Nacional y en Derecho Privado de la Universidad Externado.

En su experiencia como servidor estatal se cuentan los cargos de procurador delegado para asuntos civiles y juez de la misma especialidad en Bogotá y Ubaté (Cundinamarca), magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de la capital y magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema. Noticia generada en Feb. 3/15 (2:21 p.m.) (Consejo Superior de la Judicatura, Comunicado, 02/03/2015)

09 de Febrero de 2015

Características principales de los contratos de prestación de servicios celebrados por la administración

Se puede considerar que:

1. El vínculo contractual que subyace en los contratos de prestación de servicios no es contrario a la ley;
2. No existe identidad de la relación jurídica derivada del contrato (sitio donde se prestó el servicio) con la situación legal y reglamentaria, ya que, entre otras razones, el hecho de trabajar al servicio del Estado no puede en ningún caso conferir el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario;
3. No existe violación del derecho de igualdad por el hecho de la suscripción de los contratos de prestación de servicios, puesto que la situación del empleado público, se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales dicha relación no tiene vida jurídica (artículo 122 de la Constitución Política), es distinta de la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios. Esta última no genera una relación laboral ni prestacional;
4. La situación del empleado público es diferente a la que da lugar al contrato de trabajo, que con la Administración sólo tiene ocurrencia cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas;
5. Se hizo énfasis en la relación de coordinación entre contratante y contratista para el caso específico.

Sin embargo y pese a lo anterior, si el interesado vinculado bajo la forma de contrato de prestación de servicios, logra desvirtuar su existencia al demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, prestación personal del servicio y remuneración, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.

(Artículo 53 C.P.). SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION "B" ACTOR: ELKIN HERNANDEZ ABREO AUTORIDADES NACIONALES CONSEJERA PONENTE: DRA. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014) REF: EXPEDIENTE No. 68001-23-33-000-2013-00161-01 No. INTERNO: 0739-2014

Dictamen pericial mal fundamentado no logró acreditar lesión enorme en compraventa realizada por IDU: Consejo de Estado

"Para la eficacia probatoria del dictamen pericial, como lo ha referido la jurisprudencia de la Corporación, el mismo "(...) debe reunir ciertas condiciones de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del mismo por parte de perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúen".

Por lo tanto, La Corporación consideró que le asistía razón al impugnante y revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual había declarado la lesión enorme en el caso concreto basado en un dictamen pericial sin fundamentos, pues a criterio de la Sala "para establecer el valor del inmueble se utilizó el método comparativo y que por lo tanto se tuvo en cuenta el precio por metro cuadrado de los predios con las mismas características para el 8 de abril de 1999 -fecha de la suscripción de la escritura de compraventa-, "De acuerdo con la investigación" hecha por los peritos, en realidad no consta ni en el informe pericial ni en documentación anexa alguna, el resultado de la referida investigación, es decir que no se registra cómo la llevaron a cabo, cuáles fueron los exámenes, investigaciones y trabajos que adelantaron para la determinación de dicho precio en esa época, ni de dónde salieron los elementos de juicio

para la comparación que dicen haber efectuado con otros predios en situación similar al que es objeto de la presente controversia”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N27591 (01496-01) Contractual 2014/08/29

Desde el 1 de enero de 2015, el derecho de petición está regulado transitoriamente, por las disposiciones del antiguo CCA

Desde el 1º de enero del 2015 y hasta que empiece a regir la nueva Ley Estatutaria sobre el derecho de petición, se reviven las disposiciones del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984) sobre la materia.

Así lo explicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al resolver una consulta elevada por el Ministro de Justicia, quien señala que existe un posible vacío normativo en cuanto al ejercicio y trámite del derecho de petición porque entró a operar la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexecutable el capítulo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 del 2011) que regulaba la materia. Además, aún no se ha sancionado la Ley Estatutaria expedida por el Congreso, que regula el tema.

La Sala, con ponencia del doctor Álvaro Namén Vargas, explicó que en la tradición jurídica nacional existe la figura de la reviviscencia de las normas, que permite revivir disposiciones que fueron derogadas, siempre que se conserve el equilibrio entre justicia y seguridad jurídica.

En este caso, recobran vigencia los preceptos establecidos en el Decreto 01 de 1984 sobre el derecho de petición, que fueron derogados expresamente por la Ley 1437 del 2011, para evitar la inseguridad jurídica por la inexistencia de una regulación específica.

Aunque la Ley 1437 del 2011 derogó, en su artículo 309, el Decreto 01 de 1984, al ser declaradas inexecutables las disposiciones que regulaban el derecho de petición en el CPACA, sin que exista todavía una normativa integral que las sustituya, deben resurgir los preceptos correspondientes del Decreto Ley 01 de 1984.

Consejo de Estado CE-SC-RAD2015-N02243 Concepto 2015/01/28 Autorizada su publicación 2015/01/28

NO SE DEMOSTRÓ RESPONSABILIDAD DE DEPTO DEL VALLE

Presencia de otra motocicleta y su vinculación en accidente constituye factor diferente a existencia de huecos en la vía

Los demandantes afirmaron que “el 13 de mayo de 1998, el señor Juan Carlos Borja Suárez se desplazaba en una moto por la vía que de La Unión conduce al municipio de La Victoria, cuando cayó en un hueco que se había formado en la vía y fue arrollado por otra moto, que se movilizaba en la dirección contraria (La Victoria – La Unión), causándole la muerte”.

La Corporación al revocar la decisión de instancia que había declarado responsable al Departamento del Valle del Cauca, explicó que “la presencia de otra motocicleta en el lugar de los hechos y su vinculación al accidente constituye otro factor, distinto a la presencia de huecos en la carretera, que pudo tener incidencia directa y eficiente en el suceso, pues, nada descarta una posible impericia de alguno de los conductores o de ambos, o la invasión de la calzada paralela por parte de uno de ellos, entendiendo que los motociclistas se desplazaban en dirección contraria, lo cual, por lo demás, tampoco está probado”.

“Si bien es cierto que se demostró tanto el daño como la falla en el servicio alegados, también es cierto que esta última no siempre resulta – per se – determinante de la producción del aquél.

Surge, entonces, la necesidad ineludible de probar la conexidad entre dichos factores, con el fin de atribuirle responsabilidad a la entidad pública demandada; por lo tanto, teniendo en cuenta que, en este caso, este tercer elemento (nexo causal) no se logró evidenciar en tanto no se aportó prueba alguna que diera cuenta de la incidencia de la falla en la causación efectiva del daño, se presenta una clara ausencia o imposibilidad de imputación de responsabilidad al departamento del Valle del Cauca por la muerte del señor Juan Carlos Borja Suárez”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N31003 (02510-01) ARD-2014/06/25

Explican contabilización de la prescripción de acción de cobro de obligaciones fiscales

El Consejo de Estado recordó que el término de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales es de cinco años, el cual se cuenta según la fuente de aquellas.

Así, cuando la obligación se deriva de un acto administrativo, aquel plazo se debe contar desde la ejecutoria de este último, de lo contrario se contabilizará a partir del momento en que la deuda es exigible. Al respecto, la corporación señaló que la ejecutoria del acto ocurre ante diversas situaciones, como la no interposición de los recursos pertinentes o su presentación de forma indebida, causal diferente a la de la decisión definitiva de los recursos o acciones de restablecimiento del derecho o revisión de impuestos presentados oportunamente

(C. P. Carmen Teresa Ortiz). (Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 15001233100020080004201 (19978), 9/10/2014) Noticia generada en Feb. 6/15 (2:43 p.m.)

Configuración de revisión extraordinaria contenida en el código contencioso administrativo

La causal de revisión prevista en el numeral 2 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, supone para su configuración, la concurrencia de dos supuestos, a saber: i) que con posterioridad a la sentencia sean recobrados "documentos decisivos" con los que el juez contencioso administrativo hubiera podido adoptar una decisión diferente y ii) que los referidos documentos no hayan podido ser aportados al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

En efecto, estima la Sala que, la causal de revisión extraordinaria en comento parte de un supuesto incontrovertible, esto es, la posibilidad de que con posterioridad a la sentencia se recobren documentos que no pudieron ser aportados por la parte interesada en el curso del proceso ordinario.

Cabe advertir que, en ningún caso, se trata de pruebas originadas o constituidas en forma ulterior a la conclusión del debate procesal sino, por el contrario, de documentos preexistentes a dicho momento, estos es, recobrados por la acción o diligencia de la parte interesada en informar la sentencia de que se trate.

En punto del contenido de los referidos documentos recobrados estima la Sala, pertinente precisar, que los mismos deben ser "decisivos", en el entendido de que su valoración por parte del juez administrativo habría dado lugar a una decisión diferente a la adoptada en la sentencia contra la cual se formula el recurso extraordinario de revisión. No se trata

entonces de documentos inconducentes o impertinentes sino de aquellos cuya fuerza probatoria entrañan la capacidad de incidir directamente en el análisis lógico del juez y, en consecuencia, en el sentido de la decisión que se adopta.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "B" ACTOR: GLORIA ESPERANZA MELO GARZÓN AUTORIDADES NACIONALES CONSEJERO PONENTE: Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá D.C., (4) cuatro de septiembre de dos mil catorce (2014). RADICACIÓN No. 250002325000200203884 02 NÚMERO INTERNO: 2205-2008

Documentos del proceso de selección que deben ser publicados en el SECOP por las entidades públicas

"La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación.

En ese sentido, el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación" Col-Compra-Eficiente-Concepto-2014-N0000313 2014/12/07

Requisito de perfeccionamiento de los Contratos Estatales

Los Contratos Estatales deben constar por escrito, lo cual constituye un elemento esencial, sin el cual el mismo no existe, salvo las expresas excepciones dispuestas legalmente, como sucede en el caso de la declaratoria de urgencia manifiesta, en el que inclusive se admite la posibilidad del acuerdo verbal.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado analizando, la acción que debe ejercerse cuando se pretende la declaratoria de existencia de un Contrato Estatal.

En efecto, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo precisó, en el caso a considerar, que la acción contractual sólo procede en aquellos eventos en los que realmente hubo un acuerdo de voluntades generador de obligaciones que se perfeccionó entre las partes; es decir, que

alcanzó a nacer, por haber recorrido la definición prevista por las normas jurídicas para su formación, advirtiéndose que no se trata pues, de que a través de una sentencia judicial, se le de vida a un negocio jurídico que no logró concretarse legalmente, por no concurrir la voluntad de las partes en la forma dispuesta por el ordenamiento jurídico para la formación de ese contrato en particular.

Texto oficial del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se pretende expedir a través del presente proyecto de ley, se estima en un valor de setecientos tres punto nueve (\$703,9) billones, a pesos constantes de 2014.

La iniciativa presentada por el Departamento Nacional de Planeación, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015.

El Plan Nacional de Desarrollo se basa en los siguientes tres pilares: 1. Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. 2. Equidad.

El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para todos. 3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

Congreso de la Republica- PL-2015-N200C-2015-N138S-Comision Tercera- TO (PND 2014-2018) 2015/02/06 Congreso de la Republica-- PL--2015-N

Dirección Jurídica implementó el módulo de conciliaciones del Sistema Siprojweb

La Dirección Jurídica avanza con total éxito en la implementación del Sistema de Información de Procesos Judiciales (Siprojweb), un software que permite con gran efectividad, el manejo y control de los procesos judiciales.

En el 2012 la dependencia reportaba cerca de 7.000 procesos judiciales y gracias a la intensa depuración del sistema, con los dependientes y los apoderados judiciales, el 31 de Diciembre de 2014 se concretó que son en total 3.042 procesos activos, según el reporte del Sistema de Información de Procesos Judiciales, Siprojweb, la nueva realidad permite efectuar ajustes e identificar las fuentes generadoras de las demandas que generan más conflicto por el impacto económico y social.

El Director Jurídico, Carlos Humberto Sánchez Llanos, como Presidente del Comité de Conciliación, inició el 2015 con la implementación del módulo de Conciliaciones incluido en el sistema Siprojweb y en tal sentido hace un llamado para que los abogados que asumen la representación judicial adjunten en formato pdf los informes y las actas de las audiencias de conciliación.

Con el control y seguimiento a la gestión judicial el sistema proporciona información actualizada, que es solicitada de manera permanente por los órganos de control durante las auditorías. Con los reportes de Siprojweb la dependencia realiza ajustes a la implementación del Modelo de Gerencia Jurídica Pública.

Alimentar el sistema es tarea del apoderado judicial del Municipio de Santiago de Cali y en tal sentido es importante sensibilizarlos sobre la importancia del reporte oportuno y la actualización del aplicativo, como una labor ligada al apoderado, como directo responsable del proceso judicial a su cargo.

Siprojweb permite además manejar la carga laboral de los abogados y hacer seguimiento a los procesos de altas cuantías. El ahorro en la labor litigiosa posibilitará a la Administración hacer mayor inversión social y evitar la mora en el pago de sentencias, toda vez que hace seguimiento al proceso, desde que empieza hasta que termina.

Publican sentencia que declaró inconstitucional repetición contra funcionarios por multas de la Superservicios que generen responsabilidad patrimonial

La Corte Constitucional publicó la sentencia que declaró inexecutable la expresión “la repetición será obligatoria cuando se trate de servidores públicos, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución”, del artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994, norma que consagra el deber de las empresas de servicios públicos a quienes la Superservicios les impuso una multa de interponer acción de repetición contra el responsable, por acción u omisión.

Para la Corte, esta regla desconoce la naturaleza de la acción de repetición y su dependencia de la responsabilidad patrimonial de Estado. Además no toda condena por daño antijurídico da lugar a la acción de repetición, agregó.

Frente a la competencia de las empresas de servicios públicos, advirtió, “a pesar del régimen privado que cubre en principio las relaciones de las sociedades de servicios públicos, pueden estar obligadas a realizar funciones públicas y adoptar decisiones cuya responsabilidad o control de legalidad está en cabeza de la jurisdicción contenciosa” (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado). (Corte Constitucional, Sentencia C-957, 12/10/2014) Noticia generada en Feb. 6/15 (12:55 p.m.)

Exoneración del deber de denunciar delitos contra menores es 'constitucionalmente inadmisibles': Corte Constitucional

La conclusión de la Corte Constitucional dio lugar a condicionar el artículo 68 de la Ley 906 del 2004, en el entendido de que el factor eximente solo es válido cuando la probable víctima no es un menor de edad. Así, si el presunto afectado es un niño, nadie estará eximido del deber de denunciar, aunque involucre a su compañero permanente, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

La providencia indica que aunque esta responsabilidad que tiene la ciudadanía para poner en conocimiento de las autoridades la presunta comisión de delitos tenga su origen en una norma de rango legal, como el artículo 67 de la Ley 906 del 2004, adquiere un estatus constitucional, cuando el presunto punible atenta contra un menor, dado que el artículo 44 de la Carta Política de 1991 exige a toda persona, a la familia y al

Estado proteger los derechos fundamentales de los niños y privilegiarlos sobre los de los demás.

El archivo de la sentencia contiene los salvamentos de voto de los magistrados María Victoria Calle y Gabriel Eduardo Mendoza (M. P. Luis Guillermo Guerrero). (Corte Constitucional, Sentencia C-848 (D-9590), 11/12/2014) Noticia generada en Feb. 6/15 (2:54 p.m.)

Si pena principal se modifica, inhabilidad para funciones públicas no puede permanecer intacta

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al recordar que el artículo 52 del Código Penal (inciso 3º) advierte que esta pena accesoria debe ser equivalente a la principal o hasta de una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la ley; la regla no cobija a servidores estatales condenados por delitos contra el erario.

La Sala actuó de oficio en este caso, atendiendo lo establecido por el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal, que permite el pronunciamiento en casación aun cuando la causal no haya sido expresada por el demandante, siempre y cuando surjan hechos nuevos no conocidos en el proceso, posteriores a la condena.

El pronunciamiento tiene lugar, dice la sentencia, pese a que tampoco se cumple con el requisito del artículo 205, que impone que el máximo de la pena privativa de la libertad exceda los ocho años de prisión (M. P. Gustavo Enrique Malo). (Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-335 (45182), 1/28/2015) Noticia generada en Feb. 6/15 (10:24 a.m.)

Asociados a las cooperativas en liquidación ocupan el último lugar en prelación de pagos

De acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 79 de 1988, la prelación de pagos de obligaciones de una cooperativa en liquidación contempla en último lugar los aportes de los asociados.

Por lo tanto, no se pueden regresar total ni parcialmente los aportes sociales sin que se hayan presentado eventos como el retiro o pérdida de la calidad de asociado, previo descuento de obligaciones y de la participación en las pérdidas económicas; cuando el asociado supere el 10 % del total de aportes de la cooperativa, o cuando se produzca la

amortización de aportes en los términos legales, pues de lo contrario se incurriría en violación legal susceptible de investigaciones y posibles sanciones, indicó la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Aunque se pueda prever que la cooperativa no tiene pasivos a pagar, el liquidador no puede devolver aportes sociales, hasta que obtenga la totalidad de paz y salvos de todas las entidades públicas o privadas que puedan acreditar su calidad de acreedor dentro del proceso. (Supersolidaria, Concepto 20141100338401, 12/29/2014) Noticia generada en Feb. 6/15 (4:07 p.m.)

Viernes 13 de Febrero de 2015

Improcedente solicitar indemnización sobre los efectos negativos causados, por el contrato que voluntariamente se perfeccionó.

La Sala procedió a confirmar la providencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la accionante dirigidas a declarar la responsabilidad e indemnización por parte del Municipio de Santiago de Cali, con ocasión de la destinación comercial de inmueble de su propiedad, a causa de una obra pública.

Al considerar improcedente jurídicamente, que la actora pretenda estructurar un juicio de responsabilidad extracontractual a partir de la celebración de un contrato de compraventa, en el cual actuó como parte, alegando después de celebrado la ocurrencia de unos perjuicios.

Bajo el argumento, que la fracción que no se vendió por no ser objeto de interés del Municipio, se desvalorizo o no sirve para la destinación que se tenía prevista.

En tanto, es inadmisibile aceptar que quien celebra un contrato bajo su consentimiento, conociendo las implicaciones que puede traer la celebración del mismo, pretenda pasar por víctima, de lo aceptado en el contrato. Confirmó. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Documento disponible al público en febrero de 2015.

Temas: Contratos. Compraventa. Responsabilidad. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Expediente 76001 23 31 000 2001 03711 01 (R 33163) de 2014

La desvinculación de un servidor público debe estar debidamente motivada so pena de lesionar el derecho fundamental al debido proceso

El Tribunal Administrativo de Bolívar desconoció el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley, al restar importancia el alcance que esta Corporación le ha dado al derecho al debido proceso en el tema de la motivación de los actos de insubsistencia de empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.

Con base en lo anterior, en su lugar, la colegiatura determinó confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, que declaró la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor.

Sin embargo, se revocaron las disposiciones en torno a la indemnización reconocida en dicho fallo; ordenando, en su lugar, a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor. Levanta.

M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Documento disponible al público en enero de 2015. Temas: Servidores Públicos. Reintegro. Motivaciones. Sentencia SU 556 de 2014- 2014-07-24

Fijan pautas para manejar documentos de proponentes en procesos de contratación estatal

La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), en su función de ente rector del sistema de compras y contratación pública, emite instrucciones sobre el manejo que las entidades estatales deben dar a los documentos presentados por los proponentes en procesos de contratación.

Así, expidió la Circular Externa 17, para indicar que solamente pueden exigir la legalización de acuerdo con la convención de la apostilla o la consularización de documentos públicos otorgados en el extranjero.

“Este tipo de legalización no es procedente para los documentos privados”, advierte. Sobre la presunción de autenticidad de los documentos, señala que las entidades no deben solicitar autenticaciones, reconocimiento, presentación personal o trámites

adicionales para documentos aportados, excepto cuando la ley lo exige expresamente y anota que los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación personal.

(Agencia Nacional de Contratación Pública, Circular externa 17, 2/11/2015) Noticia generada en Feb. 12/15 (4:19 p.m.)

Esta es la sentencia de exequibilidad de la norma que eliminó condición de querellable a violencia intrafamiliar

La Corte Constitucional publicó el texto de la sentencia que declaró exequibles las expresiones “y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal” y “Suprímase del numeral 2, del artículo 74 de la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 108 de la Ley 1453 del 2011, las expresiones: violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229), e inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233)”, contenidas en los artículos 1º y 2º de la Ley 1542 del 2012.

En su opinión, el legislador cuenta con la facultad y libertad para configurar y tipificar delitos, así como para definir y regular los requisitos o condiciones para la iniciación de la acción penal. En el caso, la eliminación de la querella no viola el artículo 42 de la Carta Política, pues persigue objetivos legítimos como son la protección de la vida, la salud y la integridad de la mujer, la armonía y la unidad familiar

(M. P. Mauricio Gonzáles Cuervo). (Corte Constitucional, Sentencia C-022, 1/21/2015) Noticia generada en Feb. 12/15 (8:22 a.m.)

Sólo en vigencia de los contratos de seguros puede hacerse exigible el pago de un siniestro

El recurrente no logró desvirtuar los planteamientos del a quo para declarar la nulidad de los actos acusados en lo que respecta a Cóndor S.A., Compañía de Seguros, por lo que no resulta necesario el adentrarse en otros cuestionamientos de la alzada.

Esto, ya que el acto administrativo objeto del sub lite tuvo como motivos o causa, hechos y conductas que se dieron de manera reiterada o repetida hasta 2001, pero la póliza tuvo vigencia hasta 1º de mayo de

1998, por lo tanto sólo procedía considerar los hechos que tuvieron ocurrencia hasta esa fecha.

De esta manera, y al evidenciarse las irregularidades en el material probatorio no hubo más opción que confirmar la sentencia recurrida en apelación, y desestimar la prescripción alegada. Confirma. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Documento disponible al público en enero de 2015. Temas: Siniestros. Contratos de Seguros. Prescripción. Expediente 25000 23 24 000 2006 00428 01 de 2014

Esquemas territoriales de asociación de conformidad con la ley orgánica de ordenamiento territorial

Las asociaciones de departamentos y municipios constituyen esquemas asociativos y, por la otra, que tales esquemas tienen, entre otros objetivos, ejecutar obras de interés común, cuya materialización, es decir, la ejecución de obras, se puede traducir en proyectos de inversión social. Lo anterior, en el entendido de que, conforme se establece en los artículos 12 y 14 de la LOOT, tales proyectos de inversión correspondan al marco de acción que integre los planes de desarrollo de las entidades que conforman la asociación.

Los esquemas asociativos son entidades administrativas de derecho público que consecuentemente gozan de personería jurídica y patrimonio autónomo de los entes que lo conforman. Igualmente el artículo 14 de la LOOT expresa que las asociaciones de municipios surgen como consecuencia del convenio o contrato-plan que suscriban los alcaldes respectivos, previamente autorizados por los concejos municipales o distritales.

En consideración a lo anterior, en el acuerdo que autoriza al alcalde para suscribir el contrato plan, también se debe identificar la fuente o, el monto o, la manera de precisar los recursos con que ese particular municipio aportará al patrimonio de la asociación de municipios.

Sin perjuicio de lo anterior, o como consecuencia de ello, dentro del patrimonio de la asociación también se pueden identificar aquellos recursos que, cedidos por las entidades que la conforman o, que con motivo de la explotación de alguna actividad o la provisión de algún servicio integran aquel patrimonio.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO- Septiembre 19 de 2014- Concepto jurídico No 035519

Corte Constitucional se inhibe de examinar restricciones a sociedades con participación estatal en alianzas público privadas

Para el alto tribunal, carece de certeza considerar que la norma viola principios de igualdad y de libre empresa (parágrafo del artículo 8º de la Ley 1508 del 2012).

En igual sentido se pronunció frente al supuesto quebrantamiento del régimen de servicios públicos, ya que las limitaciones incluyen a las empresas del sector. La Procuraduría, por su parte, considera que esta disposición solo impide la concurrencia de estas sociedades como contratistas, pero les permite hacerlo representando el extremo privado de la respectiva alianza.

La norma atacada, sobre participación de entidades de naturaleza pública o mixta en el régimen de las APP, indica que la ley no aplica a las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación inferior al 50 %, sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con participación del Estado inferior al 50 %, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas industriales y comerciales del Estado cuando desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados cuando estas obren como contratantes

(M. P. Luis Ernesto Vargas). (Corte Constitucional, Comunicado Sentencia C-050 (D-10324), 2/11/2015) Noticia generada en Feb. 12/15 (9:40 a.m.)

Empleador que hace pago por consignación de acreencias laborales debe informarle al trabajador

Bajo el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador debe pagar las acreencias laborales debidas a la terminación del contrato laboral.

En ese caso, cuando no hay acuerdo frente al monto de la deuda o el trabajador se niega a recibir lo debido, la obligación del patrón es realizar el pago por consignación, reiteró la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, aclaró que no es suficiente que el empleador consigne el dinero correspondiente, pues está obligado a notificarle al empleado la existencia del título y el juzgado en el que puede retirarlo, de lo

contrario, esto evidencia que actuó con mala fe y, así, su responsabilidad se extiende hasta ese momento.

En ese sentido, la falta de buena fe en el pago de tales obligaciones genera la sanción moratoria a favor del trabajador, reiteró el fallo (M. P. Carlos Ernesto Molina). (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia SL-4400 (39000), 3/26/2014) Noticia generada en Feb. 13/15 (8:20 a.m.)

La falta de jurisdicción para dirimir procesos se deriva en desajustes que pueden verse implementados como vías de hecho

El Tribunal sí tuvo en cuenta las razones jurídicas que rigen la materia referente a las nulidades procesales, y que advierten que las generadas por falta de jurisdicción y competencia funcional, son insanables, de ahí que no le asista razón al convocante cuando alega la existencia de una vía de hecho.

En esta forma, la decisión censurada se vio caprichosa, ni carente de base jurídica, por lo que resultó razonable, motivo por el cual no le fue permitido al juez constitucional entrar a controvertirla so pretexto de tener una opinión diferente, pues quien ha sido encargado por el legislador para dirimir el conflicto es el juez natural, y su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten las desviaciones protuberantes a que se ha hecho mención, y que en este evento no se evidencian.

Niega. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Documento disponible al público en enero de 2015. Temas: Jurisdicción. Controversias. Vías de Hecho. Sentencia T 38836 de 2015- 2015-01-14

Miércoles 18 de Febrero de 2015

Procedimiento administrativo de restitución de tierras despojadas consagrado en la ley 1448 de 2011 y decreto número 4829 de 2011

Con el objeto de cumplir con las disposiciones que de acuerdo a las competencias de cada una de las entidades, le correspondan en el marco de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, a través del presente instructivo, damos a conocer el procedimiento que se

adelantará en los procesos administrativos y judiciales de restitución de tierras.

Durante el cumplimiento de las labores y funciones que se describen, los funcionarios que tengan a su conocimiento asuntos relacionados con las normas que regulan la aplicación de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, deberán tener en cuenta los fines perseguidos con la ley y la política pública de restitución, y en particular considerarán el objetivo de resarcir a las víctimas de despojo y abandono forzado de sus tierras; para lo cual, los procedimientos administrativos son apenas instrumentos de medio.

En consecuencia, se debe evitar al máximo obstaculizar o demorar los trámites que deban adelantarse dentro del proceso de restitución, remover de oficio los aspectos puramente formales que impiden su cumplimiento para evitar decisiones inhibitorias, en procura de la efectividad del derecho material de las víctimas que han solicitado su inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante Registro de Tierras o RTDAF).

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO- Febrero 06 de 2015-
INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA CONJUNTA NÚMERO 01

Texto sancionado de ley estatutaria de salud

“Artículo 10. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.

Artículo 20. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud.

El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación,

coordinación y control del Estado". Presidencia-Ley-2015-N0001751
2015/02/16

Determinaciones sobre la desviación del poder en la planta de personal de las entidades públicas

La desviación de poder consiste en que determinada atribución de que está investida una autoridad, se ejerce no para obtener el fin que la Ley persigue y quiere, sino otro distinto.

El acto por el cual el nominador retira del servicio a un funcionario está revestido de la presunción de legalidad, siendo deber del particular desvirtuarla, en el sentido de comprobar que con su retiro el nominador tuvo en cuenta intereses particulares y caprichosos y, que por tal razón se desmejoró el buen servicio; ya que quien afirme que en su expedición concurrieron razones distintas, está obligado a incorporar la prueba que así lo demuestre.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN "B" Actor: JAIRO RIVERO ARDILA AUTORIDADES
MUNICIPALES CONSEJERA PONENTE: DRA. BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE
PÁEZ Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014)
Radicación No. 68001-23-31-000-2002-01122-01 Expediente No. 4737-
2013

Consideraciones generales sobre la figura de la antinomia jurídica

La antinomia se presenta cuando dos normas incompatibles son aplicables al caso concreto porque tienen el mismo ámbito de validez material, temporal y espacial, caso en el cual le correspondería al juez establecer cuál de las dos normas es la aplicable al caso concreto.

Sin embargo, para la Sala, no es necesario que para resolver la litis del caso concreto se excluya la aplicación del artículo 33 de la Ley 675 de 2001 o del artículo 482 E.T., por cuanto, en realidad, esas normas no se contradicen. Más bien, se reitera, se deben interpretar armónicamente.

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA
Demandantes: Alba Lucía Orozco y Hernando Morales Plaza
Demandado: U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Magistrado sustanciador: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación: 11001032700020070004700 y 11001032700020080000300 (acumulados) No. Interno: 16866 y 16996

Principios generales y las reglas que regulan la función archivística del estado

La Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos", establece los principios generales y las reglas que regulan la función archivística del Estado, la Administración Pública en sus diferentes niveles, así como las distintas instituciones privadas que cumplen funciones públicas, esto, con el fin de contar con documentación e información institucional organizada que permita su uso eficiente y su fácil recuperación, para el servicio y beneficio de todos los ciudadanos.

Por su parte, las disposiciones reglamentarias de la Ley 594 de 2000, entre otras, el Decreto 2609 de 2012 en sus artículos 35 y 36, establece en cabeza de Ministerios y Superintendencias la responsabilidad de implementar en sus respectivos sectores las políticas de gestión documental e instruir a las entidades privadas bajo su inspección, control y vigilancia sobre el manejo de sus archivos, con el fin de asegurar la adecuada producción, recepción, distribución, organización, conservación, recuperación y consulta oportuna de los documentos de archivo que manejen.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO- Febrero 11 de 2015-
Concepto jurídico No 85016

No procede tutela contra 'hábeas corpus'

Para el Consejo de Estado, considerar lo contrario sería tanto como despojar de su carácter excepcional y subsidiario a la acción de tutela. Anotó que el artículo 6º (numeral 2º) del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la acción, precisamente, que el asunto pueda ser debatido a través del hábeas corpus.

En conclusión, dice la Sala, no es viable acudir a la tutela para revisar decisiones relacionadas con la privación de la libertad que han sido discutidas por el juez de hábeas corpus, "so pena de desvirtuar su

carácter especialísimo y prevalente frente al recurso de amparo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política”

(C. P. Alberto Yepes). (Consejo de Estado Sección Quinta, Sentencia 11001031500020140353600, 2/12/2015)

En la audiencia de adjudicación, solo se puede adjudicar el contrato o declarar desierta la licitación

Si la escogencia de un Contratista del Estado debe hacerse en audiencia pública, en ella sólo puede ocurrir una de dos cosas: o se adjudica el contrato o se declara desierta la licitación.

En este sentido se pronunció el Consejo de Estado, advirtiendo que si tales decisiones se adoptan por fuera de la audiencia que prevé el Pliego de Condiciones, resulta claro que dicho acto queda viciado de nulidad, el cual no puede ser objeto de subsanación.

Servidores públicos deben declarar y solicitar la separación del proceso, en caso de impedimento o recusación

Los servidores públicos que conozcan del proceso de responsabilidad fiscal en quienes recaiga cualquier causal de impedimento deben declararlo y, por lo tanto, solicitar la separación del conocimiento del proceso, con el fin de garantizar la imparcialidad que debe imperar en este trámite, recordó la Contraloría General de la República.

De manera general, los impedimentos y las recusaciones son decididos por el juez que le sigue en turno y/o superior jerárquico del funcionario impedido o recusado, según el caso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), indicó la entidad.

(Contraloría General de la República, Concepto EE177138, 02/18/2015) Noticia generada en Feb. 18/15 (10:48 a.m.)

Diferenciación entre la causación y el disfrute de la pensión de vejez

Tal como lo resalta el impugnante, no es dable confundir la causación de la pensión de vejez con su disfrute.

La primera ocurre desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos normativamente; en cambio, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la pensión, están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez.

SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014). Radicación n.º 44770

1.341 concursantes pasaron examen para ser jueces y magistrados: Consejo Superior

Según cifras reportadas por el Consejo Superior de la Judicatura, 1.098 aspirantes pasaron el examen para ocupar cargos de jueces, y 243, de magistrados de tribunal.

De los 36.330 abogados que se presentaron a la convocatoria, 27.690 fueron admitidos para concursar, pero solo 21.746 concurrieron a presentar la prueba, indicó la Sala Administrativa.

Cabe recordar que en agosto pasado, el Consejo de Estado levantó la suspensión provisional que se había decretado sobre este concurso. La decisión también revocó la medida cautelar que impidió practicar las pruebas sicotécnicas y de conocimiento que la Sala había programado.

Varias fueron las denuncias que se presentaron sobre presuntas irregularidades en el examen de los aspirantes a estos cargos, a pesar de lo cual la Judicatura autorizó la realización de las pruebas. El Juzgado de Circuito de Samaniego (Nariño), por ejemplo, había informado sobre un posible fraude en el examen a través de la venta de las preguntas y respuestas, por un valor cercano a los ocho millones de pesos.

Ver adjunto con el listado de los participantes que aprobaron el concurso. (Consejo Superior Judicatura, Resolución CJRES1520, feb. 12/15)

VIII Encuentro de Derecho Público se realizará en Cali

El viernes 20 de Febrero se realizará en el Hotel Intercontinental de Cali el VIII Encuentro de Derecho Público, organizado por la Fundación Tribuna Jurídica, con el apoyo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y entidades públicas y privadas de la región.

Participarán abogados de la Administración Municipal, Magistrados, Jueces, Personería, Procuraduría, Contraloría, representantes del sector académico y empresarial, así como abogados litigantes. Las conferencias estarán a cargo de Magistrados del Consejo de Estado y el cierre contará con la presencia del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.

Agenda académica

8:00 am Instalación Oscar Valero Nisimblat, Presidente del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

8:15 am "La Justicia en Colombia" Gustavo Gómez Aranguren, Magistrado Sección segunda Consejo de Estado

9:00 am "Títulos de imputación en materia de responsabilidad extracontractual del Estado, Hernán Andrade Rincón, Magistrado Sección tercera del Consejo de Estado

9:45 am "Aspectos tributarios territoriales", Hugo Bastidas Bárcenas, Magistrado sección tercera del Consejo de Estado
Receso

10:45 "Unificación de la jurisprudencia", William Zambrano Cetina, Magistrado Sala de Consulta del Consejo de Estado

11:30 am "La responsabilidad del Estado en el ejercicio de la potestad tributaria", Jorge Octavio Ramírez, Magistrado sección cuarta del Consejo de Estado

12:30 am "La función pública y la carrera administrativa", Rafael Vergara Quintero, Magistrado sección segunda del Consejo de Estado

Receso

2:00 pm "Inhabilidades en materia electoral, Presentación del libro, Susana Buitrago Valencia, Magistrada sección quinta del Consejo de Estado

2:45 pm "Proceso de nulidad electoral", Alberto Yepes Barreiro, Magistrado sección quinta del Consejo de Estado

3:30 pm "Acciones preventivas y disciplinarias en el proceso electoral por parte de la Procuraduría General de la Nación", María Eugenia Carreño Gómez, Presidente Comisión Nacional Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación

4:30 pm "Control Constitucional a cargo del Consejo de Estado - objeciones Presidenciales frente a Actos Legislativos", María Claudia Rojas Lasso, Magistrada sección primera del Consejo de Estado

5:00 pm "Delitos contra el sufragio" Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación

La Relatoría estará a cargo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

Mayores informes: Fundación Tribuna Jurídica
8810851- 3006133029
tribunajuridicarev@hotmail.com

Lunes 23 de Febrero de 2015

Si el uso de alambres de púas causa daño a los demás, éste es imputable a quien los utiliza por ser un evidente peligro

El Municipio de Uramita, Antioquia, es responsable por instalar este tipo de artefacto peligroso en el parque principal, que causó la pérdida de un ojo a un menor de edad: Consejo de Estado.

"El régimen de imputación del riesgo excepcional (...) halla asidero y fundamento, en el concepto de daño antijurídico (art. 90 C.P.), en la medida que éste impone el reconocimiento del deber de indemnizar ante la constatación efectiva de un daño o lesión jurídica a un bien jurídicamente tutelado, que la persona no se encuentra en la obligación de soportar, dado que ese detrimento se impone con transgresión del principio de igualdad ante las cargas públicas, como quiera que, en estos eventos, se somete por parte de la administración pública -a través de una actividad lícita y/o legítima- a la persona a un riesgo de naturaleza especial, excepcional y extraordinario que desborda,

necesariamente, el parámetro de riesgo permitido- asumido- al interior del conglomerado social”.

Por lo tanto, La Corporación consideró que le asistía razón al impugnante, quien alegaba que el municipio de Uramita era responsable por la pérdida de un ojo de su hijo menor de edad al tener un accidente con unos alambres de púas que protegían unos árboles ubicados en el parque del municipio, tesis que compartió la Sala, revocando el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, ya que “no se puede desconocer que el alambre de púas es un objeto peligroso que conlleva un riesgo evidente por las características que posee, de allí que, los daños derivados de este tipo de artefactos deben ser imputables a quien los utiliza ya que al hacerlo pone en evidente peligro a los demás”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N27740 (02963-01) ARD-2014/06/12

Andje formula lineamientos sobre la aplicación del principio de no enriquecimiento sin justa causa

A modo de resumen y como complemento de la cartilla 7 "Responsabilidad patrimonial del Estado fundada en el principio de no enriquecimiento sin justa causa", la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) expidió una circular en la cual concreta, con carácter vinculante, la línea relativa a la aplicación de dicho principio.

Inicialmente, hace referencia a generalidades de la responsabilidad patrimonial estatal por la ejecución de prestaciones sin contrato, principio del enriquecimiento sin justa causa. Además, señala los requisitos y efectos de orden sustancial definidos por la jurisprudencia para que proceda el reconocimiento de prestaciones patrimoniales sin sustento contractual.

Para finalizar, hace precisiones sobre los presupuestos formales o procedimentales en relación con la aplicación del principio. Cabe mencionar que a la cartilla se puede tener acceso en el sitio web www.defensajuridica.gov.co.

(Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Carta circular 0006, 02/20/2015) Noticia generada en Feb. 20/15 (2:53 p.m.)

Requisitos establecidos en el C.P.A.C.A para el decreto de pruebas en segunda instancia

El C.P.A.C.A en el Artículo 212 establece que tratándose de recurso de apelación contra sentencia, se decretarán pruebas en segunda instancia:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia; 2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento; 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos; 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria; 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

Consejo de Estado- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA- Actor: MARTÍN LEAL MONSALVE Demandado:
CRISTIAN ADRIAN RESTREPO BONET- Consejero ponente: MARCO
ANTONIO VELILLA MORENO- Bogotá D.C. dieciocho (18) de septiembre
de dos mil catorce (2014)- Radicación: 2012 00141 01(PI)

Requisitos que debe contener la demanda ante la jurisdicción administrativa

El artículo 137 del Código Contencioso Administrativo establece los requisitos que debe contener la demanda ante la jurisdicción administrativa y, entre ellos, "lo que se demanda" (numeral 2), es decir, las pretensiones de la demanda, que deben ceñirse a los lineamientos que están relacionados con el derecho de acción y que constituyen el objeto de ésta.

Uno de ellos, es el acto demandable, que en el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 135 ibídem, debe ser un acto que ponga término a una actuación administrativa, es decir, se debe tratar de un acto definitivo, que según el artículo 50 del mismo ordenamiento, es aquel que decide directa o indirectamente el fondo del asunto o los actos de trámite que hacen imposible continuar la actuación de la Administración.

Es de anotar que el acto definitivo no puede confundirse con el acto que agota la vía gubernativa, es decir, con la decisión de los recursos que deben interponerse para cumplir con el presupuesto de la acción del previo agotamiento de la vía gubernativa, previsto igualmente en el artículo 135 citado, según el cual "la demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio negativo".

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA- Actor: ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. (NIT. 900.125.986-9) Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA- Consejera Ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA- Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014)- Radicación: 66001233100020070013101 [20129]

No le es dable al Consejo de Estado extender los efectos de sentencias dictadas por otras Corporaciones

La Sección Tercera nunca ha tratado el tema del desplazamiento en una sentencia de unificación de las establecidas en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.

"Con apoyo en los artículos 10, 102 y 269 de la Ley 1437 y el marco previamente fijado por la Corte Constitucional al definir la exequibilidad de las enunciados normativos citados, concluye que las autoridades administrativas, al resolver los asuntos de su competencia, en orden a materializar el principio de igualdad constitucional deben aplicar de manera uniforme las disposiciones legales y constitucionales para lo cual deberán atender los criterios fijados por esta Corporación por vía de unificación, lo que comporta que la situación de hecho responda a la decidida, en armonía con decisiones de constitucionalidad relativas a iguales normas y derechos.

Siendo así, en el marco del recurso de extensión de jurisprudencia creado por la Ley 1437 de 2011 no le es dable a esta Corporación extender los efectos de sentencias dictadas por otras Corporaciones; sin perjuicio, claro está, del obligado respecto por las decisiones de constitucionalidad'.

Por lo tanto, La Corporación consideró que en este caso no podía ordenar la extensión de jurisprudencia solicitada por los demandantes, pues explicó que sobre el tema de desplazamiento, el cual era el tema central en el sub-lite, “la Sección Tercera ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones, en las cuales con apoyo de las normas nacionales, de derecho internacional y el propio precedente constitucional ha definido aspectos como la condición del desplazado, las modalidades de desplazamiento, el régimen probatorio y la imposición de medidas de reparación integral, entre otros.

Sin embargo, el tema no ha sido tratado en una sentencia de unificación de las establecidas en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, situación que también torna improcedente la aplicación del instituto invocado en esta oportunidad por los actores”.

Consejo de Estado CE-SEC3-EXP2014-N45115 (00059-00) Extensión
Juris 2014/07/09

Salvaguardar la administración de justicia como una de las finalidades del derecho disciplinario

El derecho disciplinario constituye un derecho-deber que comprende el conjunto de normas, sustanciales y procedimentales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo.

Su finalidad, en consecuencia, es la de salvaguardar el acatamiento, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos, y es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la obediencia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables.

Consejo Superior de la Judicatura- SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA- Magistrado Ponente Doctor PEDRO ALONSO SANABRIA
BUITRAGO- Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce
(2014)- Radicación No. 270011102000201000018 01

Viernes 27 de Febrero de 2015

Hora cátedra se tendrá en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia: Sentencia de Unificación Publicado por

El Decreto 259 de 1981 (6 de febrero) reglamentó parcialmente el Decreto 2277 de 1979, en lo relacionado con la inscripción y ascenso en el Escalafón, con relación al ascenso docente indicó que el educador debería -entre otras, certificar el tiempo de servicio y en el b), indicó que si no fuere docente de tiempo completo, el certificado especificará el número de horas cátedra, es decir, que era posible el cómputo del tiempo de servicio como docente hora cátedra.

Sobre el particular la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 24 de agosto de 2000 indicó que era posible tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio prestado como docente hora cátedra y señaló que para su cálculo se daría aplicación al parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

Así las cosas, la Sala consideró que “no le asiste la razón al Tribunal que negó las súplicas de la demanda porque a su juicio la vinculación como docente externa de hora cátedra comprendido entre los años 1985 y 1993, no tiene incidencia en el reconocimiento de la pensión gracia por cuanto no medió una vinculación laboral con el Departamento de Sucre, en consecuencia se revocará la sentencia apelada para en su lugar entrar a determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia”.

Consejo de Estado CE-SEC2-EXP2015-N02017-01 (00775-14) Nulidad-Restab 2015/01/22

Mostrar expedientes a personas no autorizadas da lugar a sanción disciplinaria

Así lo indicó el Consejo Superior de la Judicatura al precisar que se trata de una de las prohibiciones establecidas en el artículo 35 del Código Disciplinario Único (CDU, Ley 734 del 2002). Agregó que el artículo 196 establece que es constitutivo de falta y origina sanción el incumplimiento de deberes y prohibiciones, como es el caso.

En el caso concreto, la Sala estableció que la funcionaria objeto del proceso incurrió en dolo grave al desconocer esta limitante (M. P. Ovidio Claros). Noticia generada en Feb. 25/15 (11:16 a.m.)

(Consejo Superior Judicatura, Sala Disciplinaria, Sentencia 76001110200020090218701 (2912), nov. 20/14, M. P. Ovidio Claros)

Funcionario no puede ser sancionado disciplinariamente por asuntos que no son de su competencia

La modificación del plan de tráfico de las obras de concesión no es una función propia del Subsecretario de Tránsito de Bogotá. Por lo tanto, el hecho de no fijar las especificidades de la utilización de maquinaria pesada no puede acarrearle una sanción disciplinaria a ese funcionario, indicó el Consejo de Estado.

De acuerdo con la Sección Segunda, en este caso no es procedente aplicar la omisión o el retardo injustificado de las funciones propias del cargo, prevista como falta gravísima en el artículo 48, numeral 38, del Código Disciplinario Único.

Según explicó, la obligación que tiene el Subsecretario de Tránsito de establecer estrategias ante eventos que puedan afectar el normal flujo vehicular o su capacidad para emitir conceptos en esa materia no implican que, entre sus funciones, esté la de modificar dicho plan.

En esos términos se pronunció el Consejo frente a la sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación al exsubsecretario de Tránsito de Bogotá Heriberto Triana, al responsabilizarlo disciplinariamente por la supuesta falta de previsión para evitar el accidente con una máquina excavadora que provocó la muerte de 21 estudiantes del Colegio Agustiniiano, ocurrido en el 2004, durante las obras de adecuación de Transmilenio en la Avenida Suba.

La Sala recalcó que de las actuaciones del funcionario sancionado no se puede concluir que haya puesto en riesgo grave o causado deterioro de la salud humana, lo que constituye un elemento adicional para calificar como atípica la falta que le atribuyó el Ministerio Público.

De acuerdo con el alto tribunal, el funcionario sufrió un daño por pérdida de oportunidad que debe ser resarcido, en virtud de la terminación del contrato de prestación de servicios que lo mantenía vinculado a la administración y de la imposibilidad de celebrar contratos estatales

posteriores, como consecuencia de la sanción de destitución e inhabilidad.

Además de señalar que ninguno de los análisis de las causas del accidente apuntan a que el plan de manejo del tráfico tuviera incidencia en la tragedia, la Sección Segunda aclaró que en el contrato de concesión se señalaban las especificidades del manejo de maquinaria pesada.

(Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 11001032500020100019600 (14862010), nov. 27/14, C. P. Sandra Lisset Ibarra)

Entra en vigencia manual para calificar pérdida de capacidad laboral

Mediante el Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014, el Gobierno expidió el manual único para la calificación de la invalidez por parte de las entidades competentes, que se aplica a los procedimientos, actuaciones, dictámenes y procesos de calificación del origen y la pérdida de la capacidad laboral que se inicien a partir de hoy, cuando entra en vigencia.

Esta norma, que derogó el Decreto 917 de 1999, define como incapacidad permanente parcial la disminución definitiva del 5 % al 50 % de la capacidad laboral, como consecuencia de un accidente o enfermedad de cualquier origen. Así mismo, precisa que la invalidez es la pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50 %.

Algunos aspectos regulados:

- El manual incluye conceptos internacionales sobre desarrollos normativos, médicos y metodológicos, para calificar de manera más objetiva esos hechos y avanzar en el proceso de calificación.
- Se aplica a todos los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial y privado, independientemente de su tipo de vinculación laboral, ocupación, edad y origen de discapacidad o condición de afiliación al Sistema Seguridad Social Integral.
- La fecha de estructuración del estado de invalidez se determina en el momento en que la persona evaluada alcanza el 50 % de pérdida de su capacidad laboral u ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la

historia clínica, los exámenes médicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la de declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral.

- En caso de que no exista historia clínica, se acudirá a la historia natural de la enfermedad, argumentada por el calificador y consignada en el dictamen, independientemente de que el trabajador haya estado o no laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral.

- Cuando una patología o diagnóstico no aparezca en el texto del documento o no se pueda homologar, se acudirá a la interpretación dada en instrumentos similares de otros países o de organismos internacionales.

(Ministerio del Trabajo, Decreto 1507, ago. 12/14)

Firma electrónica solo tiene validez cuando el documento conserva su naturaleza de ser electrónico

“A partir de lo anterior y con base en la observación de los documentos anexos en su comunicación, no se puede identificar la asignación de la firma electrónica y los mecanismos apropiados que dan autenticidad, integridad y fiabilidad de la misma.

A su vez, se hace necesario aclarar que la firma electrónica solo tiene validez cuando el documento conserva su naturaleza de ser electrónico; cuando este se imprime se deberían crear los mecanismos para que el destinatario pueda validar la asignación, su autenticidad, la integridad y demás elementos necesarios de la firma electrónica”. Archivo General--Concepto--2014-N

No es posible restringir el lenguaje de los medios de comunicación para divulgar noticias y opiniones

Para determinar si un periódico desconoció los derechos a la igualdad y al buen nombre al emplear en dos publicaciones el término “negrearon” y negarse a rectificarlo por considerar que dicha palabra no tiene contenido discriminatorio, la Corte Constitucional reiteró la jurisprudencia sobre las libertades de expresión, de información y la obligación de rectificación.

En este contexto, señaló que la Constitución protege especialmente al derecho a la información por su importancia en el Estado social y democrático de derecho y advirtió que los límites a la actividad informativa son taxativos y por eso “no es posible restringir el lenguaje escogido por los medios de comunicación para divulgar noticias u opiniones”.

El lenguaje coloquial no está prohibido constitucionalmente sobre todo cuando por medio del mismo se logra expresar y difundir de manera más efectiva cierta información, agregó. Sobre la libertad de expresión, reiteró que no se circunscribe al contenido de lo que se da a conocer sino también a la forma que se emplea para este fin, lo cual no es un asunto menor considerando la gran influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad y su poder de influencia

(M. P. Mauricio González Cuervo). (Corte Constitucional, Sentencia T-934, 12/3/2014) Noticia generada en Feb. 25/15 (4:19 p.m.)

Requisitos subsanables y no subsanables.

Los pliegos no pueden transgredir lo establecido en la ley

Lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que se le formula a cada requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto asigna puntaje al oferente? si no lo hace es subsanable, y no importa si se refiere a no a problemas de capacidad o a requisitos cumplidos antes o después de presentadas las ofertas, con la condición de que cuando le pidan la acreditación la satisfaga suficientemente. En este sentido se pronunció el Consejo de Estado en reciente sentencia.

En la providencia se establece la diferencia entre subsanar y aclarar. En efecto, subsanar, implica reparar un defecto de la propuesta, con mayor precisión la omisión de algún requisito, ya que la norma se refiere a la “la ausencia de requisitos o la falta de documentos” que afecten el futuro contrato o las calidades del proponente, siempre y cuando no incidan sobre la comparación de las ofertas pueden ser reparados o subsanados, es decir, que ello implica adicionar un documento o requisito que la propuesta no tiene.

Aclarar o explicar es diferente, por cuanto refiere a dilucidar un aspecto dudoso o definiendo las incoherencias, indicándose que lo ideal en un proceso de selección es que las aclaraciones y explicaciones se anticipen y soliciten durante la etapa de evaluación, lo más pronto posible, es

decir, antes de que la entidad elabore el informe respectivo, de tal manera que las tenga en cuenta para producir ese acto administrativo.

De otra parte, se manifestó que los pliegos de condiciones no pueden transgredir lo prescrito en la ley y deben interpretarse de conformidad con ella; por tanto, una contravención formal –que se explica con la ayuda de otros documentos de la misma oferta- no autoriza el rechazo de una propuesta.

Finalmente es pertinente indicar que el legislador no prescribe que la terminación unilateral de un contrato afecte la capacidad contractual en futuros procedimientos de selección, por tanto no impide a quien recibe esa medida ser adjudicatario de contratos posteriores, salvo que la terminación proceda de la declaración de caducidad, que sí es una sanción que produce inhabilidad.

Póliza de estabilidad de la obra.

Competencia temporal y debido proceso para hacerla efectiva

La ocurrencia de un siniestro en materia de Contratación Estatal debe ocurrir en vigencia de la póliza; sin embargo, no sucede lo mismo con el término que tiene la Administración para proferir el acto administrativo que lo declara y ordena hacer efectiva una póliza constituida a su favor, hecho que puede ser coetáneo o posterior a la vigencia de la garantía.

En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado reiterando que en materia de contratación estatal no aplica el procedimiento previsto en los artículos 1075 y 1077 del Código de Comercio, relativos a la reclamación por parte del asegurado y a la objeción que puede formularle el asegurador, toda vez que tal reclamación se suple a través de la expedición de un acto administrativo mediante el cual la Administración unilateralmente declara ocurrido el siniestro y ordena la efectividad de las garantías, decisión que puede ser impugnada por éste y también por el contratista, administrativa y judicialmente.

Finalmente en la sentencia se analizó el tema del debido proceso y la validez del acto administrativo que declara el siniestro y ordena hacer efectiva la póliza, advirtiendo que el debido proceso no se garantiza simplemente con la posibilidad de discutir la decisión inicial, a través de los recursos de la vía gubernativa, puesto que, es necesario que se agote un procedimiento previo a la adopción de la decisión, en aras de garantizarle al Contratista el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción.

Realizó: Claudia Salas Martínez
Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Procedimiento Difusión de Información Jurídica
Alcaldía de Santiago de Cali
Teléfono oficina - 57-2 8896744
WhatsApp: 3117704301
Claudia.salas@cali.gov.co